

San Miguel, once de julio de dos mil veintidós

Vistos:

Por sentencia de veintinueve de marzo del año en curso, pronunciada por la jueza titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, doña Patricia Andrea Agüero Gaete, en estos antecedentes RUC 20-4-0253457-6, RIT O-171-2020, se acogió la demanda impetrada en la presente causa, se declaró injustificado el despido del demandante y, en consecuencia, se condenó a la demandada Esert Servicios Integrales de Seguridad Ltda., representada legalmente por Ricardo Mario Reyes Moreira y, en forma subsidiaria, a la demandada Universidad de Santiago de Chile, representada legalmente por Juan Pablo Aguirre Álvarez, a pagar al demandante Roberto Alonso Fernández Allende, las prestaciones que indica, con los reajustes e intereses contemplados en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo. Se rechazó la demanda en lo demás solicitado, no condenándose en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida.

En contra de la sentencia definitiva precitada, el abogado Rodrigo Rivera Smith, en representación de la demandada Esert Servicios Integrales de Seguridad Limitada, interpuso recurso de nulidad, invocando la causal de invalidación contemplada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo y, en subsidio de aquella, la del artículo 477 del mismo cuerpo normativo.

Pide la recurrente que esta Corte anule la sentencia recurrida, ya sea que se acoja el motivo principal de nulidad o el subsidiario, y que se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, *“declarando que [su] representada ha procedido justificadamente al despido de don Roberto Fernández y en consecuencia se recha[ce] en todas sus partes la demanda deducida por la parte demandante. Todo lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de las facultades que se le confieren a la Corte de oficio, para anular el fallo por cualquiera de los motivos consignados en el artículo 478 del Código del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 479 del Código del Trabajo”*.

Por resolución de esta Corte de veintiuno de abril del presente año se declaró admisible el recurso de nulidad por los motivos precedentemente indicados. En la audiencia del día cinco de los corrientes intervino ante la cuarta sala de este tribunal *ad quem*, por el recurso, la abogada de Esert Servicios Integrales de Seguridad Limitada, doña Ángela Pafián Núñez.

Con lo oído y considerando:



Primero: Que, como se ha señalado, la causal invocada como principal es la contemplada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, por haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Funda este motivo de invalidación en que el tribunal del fondo habría infringido tales reglas al ponderar la prueba documental y testimonial rendida, pues su parte presentó dos testigos, trabajadores de la demandada, *“los cuales fueron contestes en señalar y reafirmar que el demandante no asistió al trabajo los días 29, 30 y 31 de enero de 2020, y además se acompañó el libro de asistencia, en el cual consta que el día 29 de enero el trabajador no asistió a su lugar de trabajo, por lo que resulta imposible que hubiese sido despedido de forma verbal”*, circunstancia que, por lo demás, debía probar el actor

Razona la recurrente que *“[l]a primera infracción que se constata en este sentido es una infracción al principio de la derivación, que se consagra en el considerando séptimo de la sentencia, en el cual la sentenciadora del mérito llega a la conclusión que existió un despido verbal del actor, el que se habría verificado el 29 de enero de 2020 [...] con la constancia estampada ante Carabineros de Chile por el mismo demandante, olvidando que dicho documento da cuenta de simples declaraciones de la propia parte demandante, lo que es igual que decir que se tuvo por establecido el despido verbal con la mera relación de los hechos del actor, vulnerando por tanto el principio de derivación y la máxima de la experiencia que da cuenta que una persona interesado en un asunto no resulta imparcial, de modo que no se puede tener por establecido un hecho con la simple declaración del mismo”*.

Añade que *“[o]tra infracción se presenta en el mismo considerando, en que el [j]uez del [g]rado da por ciert[o]s y veraces los dichos del actor debido a que éste se había ausentado los últimos días de enero, días que no fueron incluidos en la carta de despido, y en virtud de lo anterior, tiene por acreditado el despido verbal del demandante. Acá nuevamente se vulneran las máximas de la experiencia y la ley fundamental de la lógica denomina ley de la derivación, ya que el sentenciador no ha dado razón suficiente, y siquiera alguna razón, al estimar que las meras alegaciones de la demandante tienen por acreditados los hechos, sobre todo si sus dichos no fueron refrendados por algún otro medio de prueba”*.



Indica que la madre del actor relató “hechos que no fueron percibidos o presenciados por ella, y que los conoce por los dichos de su propio hijo. Si bien, este relato puede estimarse como base de una presunción judicial, solo es válido cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir de una de las partes, en cuanto de este modo se esclarezca o explique los hechos. Lo que en el caso no ha ocurrido, la señora Allende indica que el motivo por el cual don Roberto Fernández dejó de trabajar fue porque lo había despedido una señora, sin indicar el día en que ocurrieron los hechos, forma y/o motivos del despido, ni entrega mayores detalles. Es evidente que existe una infracción a los principios de la sana crítica, ya que existen contradicciones en la apreciación de la prueba que permitieron fundar la convicción del tribunal para acoger la demanda”.

En fin, expresa la recurrente que “[e]n el mismo considerando se razona que los testigos de [su] parte no fueron claros al explicar por qué la carta solo contenía los días de ausencia de febrero y no los de enero, pero basta con revisar sus declaraciones para comprobar que ello no fue así”, reproduciendo, a continuación, parte de tales declaraciones.

Concluye que su parte “incorporó en la audiencia de juicio la carta de despido de 02 de febrero de 2020 por la causal de ausencias injustificadas y el comprobante de envío por carta certificada y también la constancia a la Inspección del Trabajo, los que claramente desvirtuaban el relato del actor y el [j]uez no dio ninguna razón en el sentido de indicar por qué se consideraron sólo los documentos de la parte demandante y no los incorporados por [su] parte, limitándose a indicar que llama la atención de la sentenciadora que no se hayan consignado también como inasistencias injustificadas los días 29, 30 y 31 de enero, en circunstancias que se vulneran las máximas de la experiencia que dan cuenta que el empleador puede libremente decidir qué causal [...] aplicar cuando se encuentra frente a una situación concreta, en este caso, señalando qué días configuran, siendo exigido por la ley dos días seguidos. Lo anterior atenta directamente con los principios que regulan y permiten apreciar las reglas de la sana crítica, relacionadas directamente con los principios que en el mismo artículo 456 señalan, es decir con los razonamientos lógicos en que el tribunal de primera instancia basa su decisión”.

Segundo: Que, como es sabido, el Código del Trabajo ha implementado un sistema de valoración probatoria de sana crítica, que

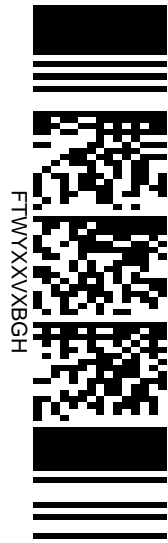


también podríamos denominar de libre valoración racional de la prueba, en el cual es el juez quien pondera el valor de los distintos elementos probatorios, individual y conjuntamente, sujeto y guiado por los criterios que aporta la racionalidad en general, dentro de los cuales se encuentran los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

La lógica, según señala el Diccionario de la Lengua Española, es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. La lógica identifica cuatro principios, esto es, normas o ideas fundamentales que aseguran la corrección en el razonamiento —los tres primeros forman parte de la lógica aristotélica y el cuarto fue identificados por Leibniz—, a saber, el de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido y el de razón suficiente.

Tercero: Que la recurrente, para sustentar la infracción a la sana crítica en que habría incurrido la sentenciadora del fondo en la apreciación de la prueba, menciona como conculcados los principios de razón suficiente y de no contradicción, además de mencionar infracción al “principio de derivación”, que no es más que una manifestación del primero. Asimismo, arguye vulneración a las máximas de la experiencia, *“que dan cuenta que el empleador puede libremente decidir qué causal [...] aplicar cuando se encuentra frente a una situación concreta, en este caso, señalando qué días configuran, siendo exigido por la ley dos días seguidos”*.

Cuarto: Que el principio lógico de “razón suficiente” que se esgrime como conculcado fue formulado por Leibniz para dilucidar el fundamento de las “verdades de hecho o contingentes (*a posteriori*), en relación con las denominadas “verdades de razón”, es decir, aquellas verdades necesarias (*a priori*). La razón no puede alcanzar un nivel de conocimiento tal como para determinar a priori la sucesión y ordenación lógica y causal de las “verdades de hecho”, a diferencia de lo que acontece con las entidades matemáticas, cuyas propiedades pueden ser deducidas al margen de la experiencia. Lo contingente, sin embargo, no excluye que se lo pueda reconducir a un orden racional y causal, y al razonar acerca del modo en que los hechos han sucedido, se identifican nexos racionales, es decir “razones” que han determinado su desenvolvimiento (Leibniz habla también de “principio de razón determinante”). En tal sentido, si bien no es posible conocer a priori aquello que ha de suceder, sí es posible afirmar que “nada acontece sin



razón”, es decir, a posteriori es posible dar razón de las verdades de hecho, las cuales descansan no sobre la necesidad, sino sobre la posibilidad. El hombre puede establecer que, si ha acontecido un determinado evento, éste ha tenido un fundamento racional y causal, incluso antes de realizarse, y tal concatenación de hechos puede ser reconstruida después de que se ha verificado el evento, no de manera completa y exhaustiva como acontece con el conocimiento de las propiedades geométricas de un triángulo, del cual se posee una noción completa, pero sí “suficiente” para dar razón de aquel, es decir, para explicar su generación o producción.

El profesor Nelson Pozo Silva, en el texto Razonamiento Judicial, (Librotecnia, Santiago, 2009, p. 273, citado en sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2906 2016), sistematiza este principio del buen razonar dentro de los principios ontológicos, llegando a la máxima de que todo “conocimiento debe estar suficientemente fundado”. Y cuando cita a Schopenhauer, a propósito de su cuádruple raíz del principio de razón suficiente, uno de esos vértices lo menciona como la “relación lógica que concatena los juicios del entendimiento”. De manera que, en el proceso intelectual de los jueces durante el razonamiento probatorio, este principio se transforma en una suerte de guía objetiva que lleva al tribunal desde la prueba rendida a las conclusiones a las que llega producto de la misma.

Quinto: Que en cuanto al principio de “no contradicción”, que también se indica como vulnerado, preciso resulta recordar que aquel implica que una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contrarias entre sí, o que una afirmación no puede ser verdadera y falsa a la vez. Así, por ejemplo, afirmar que a) las conclusiones de la prueba testimonial no son atendibles y después, en la motivación de la sentencia, b) fundamentar la decisión en un hecho referido por un testigo, significa hacer una afirmación contradictoria porque a) y b) no pueden ser ambas verdaderas, señalando una que el testigo no es atendible y la otra que lo es. Igualmente contradictoria es la afirmación que se articula en un paralogismo que, de una premisa mayor a) y una menor b), extrae la afirmación de síntesis c), sin un nexo de inferencia y deducción del desarrollo argumentativo.

Sin embargo, el vicio de contradicción en la motivación de la sentencia ocurre solo en presencia de argumentaciones contrastantes, de tal modo que no permitan comprender la “*ratio decidendi*” que sustenta la resolución adoptada.



Sexto: Que, en fin, en cuanto a las máximas de la experiencia supuestamente conculcadas, Couture (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1966, pág. 192) define dichas reglas como *“normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie”*. Por su parte, Calamandrei (Estudios sobre el proceso civil, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, pág. 381), señala que son extraídas del patrimonio intelectual del juez y de la conciencia pública y que *“las máximas de experiencia poseídas por él, por lo general, le servirán de premisa mayor para sus silogismos (por ejemplo, la máxima de que la edad avanzada produce en general un debilitamiento de la memoria, le hará considerar en concreto la deposición de un testigo viejo menos digna de crédito que la de un testigo todavía joven)”*. En fin, indica Stein (El conocimiento privado del juez. Traducción de Andrés de la Oliva Santos, Segunda Edición, Temis, Bogotá, 1999, pág. 27) que *“son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”*.

Asimismo, nos ilustra Taruffo (La prueba de los hechos. Traducción de Jordi Ferrer Beltrán, Editorial Trotta S.A., Madrid, 2002, pág. 271 ss.), que *“el tipo de inferencia que puede formularse y la naturaleza de las conclusiones que pueden obtenerse dependen de las características del criterio que se use para vincular X a Y. Así, por ejemplo, se podrá obtener una inferencia deductiva idónea para producir una consecuencia cierta sobre X si el criterio es una regla general del tipo «siempre que Y, entonces X», mientras que se podrán obtener inferencias probabilísticas sobre la base de criterios del tipo «en el 76,83% de los casos de Y también se da X», o bien y éste es el caso más frecuente inferencias vagas fundadas en máximas de experiencia también vagas en la medida en que expresan únicamente toscas e imprecisas generalizaciones de sentido común. [...] En general, de todos modos, el grado de confirmación que la inferencia fundada sobre Y atribuye a la hipótesis que concierne a X está determinado esencialmente por la naturaleza y las características del criterio que vincula X a Y: cuanto más*



seguro y preciso sea ese criterio, mayor será el grado de confirmación de la hipótesis y, en cambio, se obtendrán únicamente confirmaciones «débiles» a partir de criterios genéricos, vagos y de fundamento cognoscitivo incierto. En este sentido adquieren especial relevancia dos características de los criterios que se emplean para formular las inferencias entre hechos. La primera de ellas está referida al contenido del criterio y, específicamente, al tipo de vinculación que éste establece entre los hechos de la; clase X y los de la clase Y. Podrá haber vinculaciones de orden general, del tipo «siempre que Y, entonces X», idóneas para fundar inferencias deductivas, o bien criterios estadísticos aptos para establecer la probabilidad/frecuencia de X dado Y, pero normalmente las máximas de experiencia enuncian criterios fundados sobre el id quod plerumque accidit, es decir, sobre generalizaciones incompletas o, en cualquier caso, vagas. En todos esos casos se trata de inferencias inductivas en las que el grado de aceptabilidad de la conclusión (es decir, de la hipótesis sobre X) depende del tipo de vinculación entre X e Y y es, por tanto, tanto más bajo cuanto más indeterminada es esa vinculación”.

El mismo Taruffo (citado por Javier Maturana Baeza, Sana Crítica: Un sistema de valoración racional de la prueba. Legal Publishing, Santiago, 2014, pág. 198 ss.) distingue entre generalizaciones válidas, cuasigeneralizaciones y aquellas no válidas o espurias. Las primeras corresponden a leyes científicas de carácter universal, aunque estén expresadas en un lenguaje ordinario. Las máximas de la experiencia basadas en cuasigeneralizaciones, no dan certezas, sino que marcan la tendencia con que un suceso suele ocurrir con ciertas modalidades, dadas determinadas circunstancias. Aquí, la máxima de la experiencia no permite llegar a un conocimiento con un grado de certeza sobre el hecho desconocido, sino que solo probable en cierto grado. Las generalizaciones espurias, por último, son aquellas que carecen de fundamentos razonables y están basadas en prejuicios, creencias, estereotipos, mitos, es decir, carecen de base empírica o fundamento epistémico y, por tanto, no deben ser aplicadas, pues no permiten atribuir grado alguno de confirmación a la hipótesis.

Séptimo: Que, del examen de la sentencia impugnada, es posible colegir que el tribunal del fondo razona adecuadamente, que es factible reproducir el razonamiento utilizado por él para alcanzar las conclusiones contenidas en el fallo impugnado, sin que se advierta en el proceso de valoración de la prueba vulneración a los principios de la lógica, a



las máximas de la experiencia ni a los conocimientos científicamente afianzados.

En efecto, el tribunal del mérito, en el basamento séptimo de la sentencia en alzada, y después de exponer la prueba rendida en los motivos que lo preceden, e indicar los hechos acreditados en el juicio, analiza el término de los servicios del demandante, quien *“señala en su libelo haber sido despedido verbalmente con fecha 29 de enero de 2020, en tanto que la empleadora afirma que el trabajador fue desvinculado con fecha 2 de febrero de 2020, en virtud de la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, fundada en las inasistencias injustificadas de los días 1 y 2 de febrero de 2020”*.

Indica la sentenciadora de primer grado que *“en orden a acreditar su pretensión, la demandada incorporó la carta de despido de fecha 4 de febrero de 2020, en la que se comunica al demandante el término de sus servicios, a contar del día 2 del mismo mes y año, por haber incurrido en la causal contemplada en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo”*, añadiendo que en dicho documento *“consta que al consignarse los hechos fundantes de la causal invocada, se imputa al trabajador haber faltado injustificadamente a sus labores los días 1 y 2 de febrero de 2020”*, y llama la atención de la magistrada *“que no se hayan consignado también como inasistencias injustificadas los días 29, 30 y 31 de enero del mismo año, ya que según consta del registro de asistencia incorporado por la parte empleadora, el demandante no habría concurrido a trabajar en esas fechas”*.

Agrega que *“las testigos que deponen por la demandada principal, Mariana Valenzuela Hidalgo y Elizabeth Epul Zavala, reconocen que el demandante dejó de concurrir a sus labores el día 29 de enero, pero afirman que siempre se espera algunos días por si el trabajador presenta licencia médica o algún documento que lo justifique”*, lo que explicaría *“los motivos por los que no se puso término a los servicios del demandante en forma inmediata, luego de configurarse la causal”*, pero *“no logran formar la convicción del Tribunal respecto de los motivos por los cuales no se consignaron las inasistencias en que habría incurrido al trabajador los tres últimos días del mes de enero”*, ya que *“si bien la testigo Valenzuela Hidalgo señala que ello se debe al cierre del mes, ello no obsta a que en la carta de despido se incluyeran todos los días que el demandante se ausentó de sus*



labores, más aún por cuanto éste ya había dejado constancia de su despido verbal, ante Carabineros de Chile, con fecha 30 de enero de 2020”.

Por consiguiente, el tribunal a quo razona que *“resulta más verosímil la versión dada por el trabajador, en el sentido de haber sido despedido verbalmente con fecha 29 de enero de 2020, razón por la que no cabe sino concluir que el despido del actor fue injustificado y, en consecuencia, se acogerá la demanda en cuanto por ella se pretende el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de servicio, prestación esta que deberá incrementarse en un 50% de recargo legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo”.*

Octavo: Que, así las cosas, no aprecia esta Corte las infracciones a las reglas de la sana crítica que la recurrente arguye, desde que la sentenciadora del mérito da razón suficiente de las conclusiones a que arriba con la prueba rendida, la que le permite tener por establecido el despido verbal que alega el actor. Tampoco se aprecia infracción del principio de no contradicción, pues en parte alguna se observa que la sentenciadora arribe a decisiones sustentadas en proposiciones contrarias entre sí, o que haya afirmado que algo es verdadero y falso a la vez. Por lo demás, la recurrente se limita a mencionar este principio, sin indicar cuáles serían las argumentaciones contrastantes que atribuye a la sentenciadora del fondo.

En fin, tampoco se vislumbra vulneración a las máximas de la experiencia, pues lo que sobre ellas señala la demandada, no es más que una generalización espuria, que carece de fundamentos razonables, utilizando la terminología de Taruffo, según se ha indicado *supra*.

Noveno: Que, en definitiva, la recurrente pretende que esta Corte haga una nueva apreciación de la prueba rendida o modifique las conclusiones fácticas del tribunal de primer grado, actuaciones que están vedadas a estos sentenciadores por esta vía, desde que los hechos en que se fundamenta la causal que se invoca no la constituyen, razón por la cual el motivo principal de invalidación ha de ser desestimado.

Décimo: Que, en subsidio de la anterior, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por estimar la impugnante que la sentencia fue dictada con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo de aquella.



Undécimo: Que para sustentar el referido motivo de invalidación arguye como conculcado el numeral 3° del artículo 160 del estatuto laboral, *“al considerar el despido como injustificado por no haberse consignado como inasistencias injustificadas los días 29, 30 y 31 de enero de 2020, ya que según consta del registro de asistencias incorporado por esta parte, el demandante no habría concurrido a trabajar en esas fechas”*.

Expresa la recurrente que esta interpretación lesiona el sentido de la referida norma *“pues [...] supone ciertos requisitos meramente objetivos, como son fundamentalmente la verificación de ausencias durante determinados días, carentes de aviso, explicación o justificación por parte del trabajador”* y *“la sentenciadora no realizó una correcta interpretación de dicha norma, puesto que según se desprende de la misma, para que proceda el despido de un trabajador, es necesario que éste no haya dado causa justificada de sus ausencias, lo que ciertamente implica poner en conocimiento del empleador la respectiva justificación. Es el propio legislador quien se ha encargado de circunscribir el sentido, señalando que la inasistencia es relevante cuando se acumule durante dos días seguidos, o durante dos lunes en el mes, o tres días en el mismo periodo”,* y *“[e]l tribunal a quo va más allá requiriendo que se consignaran las ausencias de los días 29, 30 y 31 de enero se debían necesariamente incluir o señalar en la carta, pese a que el actor faltó los días 1 y 2 de febrero igualmente. En este sentido el tribunal agregaría un nuevo requisito a la carta de despido, ya que, junto con indicar la causal de despido y la relación de hechos, el tribunal impondría un nuevo requisito consistente en que deben indicarse todos los días en los que se ausentó el trabajador y no solo los dos que indica la ley”*.

Duodécimo: Que la causal en análisis es estrictamente jurídica y, por su naturaleza, supone la aceptación plena de los hechos que el tribunal del fondo ha tenido por acreditados en la causa, los que resultan intangibles para el tribunal de nulidad. Así las cosas, constituye un hecho asentado —e inmodificable—, que el trabajador fue despedido verbalmente por la recurrente el 29 de enero de 2020.

Decimotercero: Que, de lo razonado, se colige que lo pedido por la demandada en su libelo recursivo al invocar esta causal, es decir, que se enmiende el supuesto error *in iudicando* en que habría incurrido la sentenciadora del mérito y que se rechace la demanda *“toda vez que no hay*



pruebas para acreditar el despido verbal y por ende injustificado”, resulta contradictorio con la causal que se invoca.

Decimocuarto: Que, por consiguiente, salta a la vista que lo que está cuestionando la recurrente es la valoración de la prueba que ha efectuado el tribunal de la instancia y no una errónea interpretación del numeral 3° del artículo 160 del Código del Trabajo, por lo que resulta evidente que el motivo de invalidación en análisis carece de fundamentos, debiendo, entonces, ser desestimado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en las normas precitadas y en los artículos 479 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Rodrigo Rivera Smith, en representación de la demandada Esert Servicios Integrales de Seguridad Limitada, en contra de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada por la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, doña Patricia Andrea Agüero Gaete, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

ROL 174-2022-Laboral-Cobranza.

Pronunciada por la cuarta sala de esta Corte presidida por la ministra Ana Cienfuegos Barros e integrada por la ministra Liliana Mera Muñoz y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B., Liliana Mera M. y Abogado Integrante Adelio Misseroni R. San Miguel, once de julio de dos mil veintidós.

En San Miguel, a once de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

